



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI  
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

**SENTENCIA 141**

Aprobado mediante Acta del 23 de mayo de 2025

Proceso	Proceso Ordinario Laboral
Competencia tribunal	Recurso de apelación
C. U. I.	760013105015201900629-02
Demandante	José Fernando del Carmen Arango Villa
Demandada	Sistemas Expertos en Salud Latinoamericana SES SAS
Vinculados	-Hospital Ortopédico SA -Seguros Equidad
Asunto	Regulación de honorarios intereses de mora
Decisión	Revocar parcialmente y confirmar
Magistrado Ponente	Álvaro Muñoz Afanador

En Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, el día veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025), la Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados Álvaro Muñoz Afanador, quien actúa como ponente, Carolina Montoya Londoño y Carlos Alberto Oliver Galé; obrando de conformidad con la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se modificó el artículo 82 del CPTSS, adopta la decisión con el fin de dictar sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, que se traduce en los siguientes términos:

**I. ANTECEDENTES**

José Fernando del Carmen Arango Villa demandó a Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, con el fin de que se declara la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales como médico cirujano; en consecuencia, se le pague la suma de \$24.016.738 por los honorarios adeudados de los servicios prestados, junto con los intereses moratorios, en subsidio de estos, los intereses corrientes, o a su vez, la indexación; así mismo, lo demás que se pruebe dentro el proceso, conforme las facultades *ultra y extra petita* del juez y las costas.

Como fundamento de sus pretensiones señaló que se vinculó con Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, a través de un contrato verbal de prestación de servicios en el 2019, como consultor externo y médico cirujano en el área de neurocirugía, en donde su función era asistir dos o tres veces a la semana a las cirugías y consultas asignadas por la empresa en la ciudad de Cali, en donde las primeras por su naturaleza podían llevar más de medio día, mientras que las segundas eran por un poco más de una hora; por las cuales al finalizar cada mes presentaba una cuenta de cobro con los servicios realizados, sin que se le cancelaran las causadas entre mayo y septiembre de 2019, ascendiendo la deuda a veintitrés millones de pesos mcte, situación que lo llevó a dar por terminado el contrato de prestación de servicios de manera verbal.

Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS indicó que las operaciones que realizaba el profesional en salud eran en el Hospital Ortopédico SOS, en el marco de un contrato de cuentas en participación suscrito entre ellas el 10 de diciembre de 2018, que, con el fin de cumplir con las obligaciones que de él se derivaban se constituyó en favor del hospital una póliza de seguros.

Por otra parte, reconoció la deuda que tiene con el demandante, la que aseguró se produjo debido a «que la sociedad (...) fue despojada de su

participación en cuanto a los dineros, en el contrato de cuentas en participación» entre ella y el hospital en que se realizaban las operaciones, «al ser removido de la Representación legal de Hospital Ortopédico el señor Juan Carlos Basto el día 23 de julio de 2019 y al inhabilitarle el acceso de la cuenta de banco BBVA a la cual eran ingresados los dineros recaudados por la operación de la clínica» y con la que se realizaba el pago de las obligaciones.

Como excepciones presentó la de inexistencia de la obligación, innominada o genérica y cobro de lo no debido.

El Hospital Ortopédico SAS indicó conforme los hechos expuestos en la demanda que la parte demandante no relaciona hechos que lo vinculen con él contractualmente, dado que las pretensiones van encaminadas a establecer una responsabilidad con Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS. Presentó como medio exceptivos la inexistencia de la relación contractual, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, solidaridad frente a terceros, y la genérica.

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, en adelante la Equidad o Equidad Seguros, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, advirtiendo que el objeto de la pólizas que suscribió con las otras instituciones que hacen parte del proceso es para garantizar la operación adecuada en cuanto a actividades asistenciales y administrativas de los servicios de la Unidad de cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intermedios (UCE), Urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio y farmacia de la sucursal SOS Trauma IPS SA.

Formuló las excepciones de inexistencia de obligación a indemnizar por parte de la equidad seguirs generales OC, con base en la póliza responsabilidad civil extracontractual N° AA005249 y póliza cumplimiento

particular N° AA005248, sujeción al contrato de seguros póliza cumplimiento particular N° AA005248 y N° AA005249, ausencia de cobertura de la póliza responsabilidad civil extracontractual N° AA005249 y póliza cumplimiento particular N° AA005248, límite de valor asegurado, deducible pactado, aplicación exclusión, inexistencia de solidaridad con la equidad seguros generales organismo cooperativo, el contrato es ley para las partes, carga de la prueba de los perjuicios sufridos y de la responsabilidad del asegurado, disponibilidad y/o reducción del valor asegurado y la innominada incluyendo la prescripción de las acciones que se deriven del contrato de seguro.

## **II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali fijó como *problema jurídico* el determina la procedencia de la regulación de honorarios en favor del demandante y a cargo de los demandados; y, en el evento de prosperar, analizar si Seguros la Equidad debe asumir la obligación, conforme la póliza de seguro. Acto seguido profirió la sentencia 067 del 29 de marzo de 2023, en la que dispuso:

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR HOSPITAL ORTOPÉDICO Y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO Y NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR SISTEMAS EXPERTOS EN SALUD LATINOAMERICANA S.A.S.

SEGUNDO: DECLARAR QUE ENTRE EL SEÑOR JOSE FERNANDO DEL CARMEN ARANGO, CALIDAD DE CONTRATISTA Y LA EMPRESA SISTEMAS EXPERTOS EN SALUD LATINOAMERICANA SAS, EN CALIDAD DE CONTRATANTE, EXISTIÓ UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

TERCERO: CONDENAR A LA EMPRESA SISTEMAS EXPERTOS EN SALUD LATINOAMERICANA SAS, A PAGAR EN FAVOR DEL DEMANDANTE, SEÑOR JOSE FERNANDO DEL CARMEN ARANGO UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA PROVIDENCIA, LA SUMA DE

\$24.016.738, POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CAUSADOS DESDE EL 28 DE MAYO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, VALOR QUE DEBERÁ SER INDEXADO DE ACUERDO CON EL IPC CAUSADO DESDE LA FECHA DE SU EXIGENCIA, HASTA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO.

CUARTO: ABSOLVER A LAS EMPRESAS HOSPITAL ORTOPÉDICO Y LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

QUINTO: COSTAS [...]

Aclaró que el estudio se hace sobre la regulación de los honorarios, dado que la parte demandante no solicitó oportunamente la declaratoria del contrato realidad; en tanto, la jurisprudencia tiene establecido que este tipo de proceso es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral, pero aclarando que esto no convierte el tema en uno de carácter laboral.

Señaló que las demandadas reconocieron la prestación del servicio a través de un contrato de prestación de servicios, así como los pagos adeudados, debiendo condenarse a los pagos a Sistemas Expertos en Salud Latinoamericana SAS, sin que sea procedente ordenar el pago de manera solidaria, por esta solo operar respecto de las responsabilidades de carácter laboral cuando se acredita a otra institución como beneficiara del servicio, lo que no se dio; misma que tampoco procedía frente a Seguros la Equidad, dado que las pólizas con ella suscritas no tiene como objeto librar de responsabilidad a la condenada.

### **III. RECURSO DE APELACIÓN**

La parte demandante solicitó que se condene a la responsabilidad solidaria en contra del Hospital Ortopédico y Seguros la Equidad, teniendo en cuenta el objeto social de cada entidad; recordando los postulados legales para que esta se declare, pues la primera entidad fue la beneficiaria del

servicio, y respecto de la segunda se tiene una póliza dentro de la que se incluye gastos médicos, condición en la que debe encargarse la prestación del servicio contratado.

También solicitó que se debe condenar a los intereses moratorios, conforme lo establecen las normas civiles, lo anterior teniendo en cuenta que la deuda al demandante radica desde el 2019, sin que se realizara ningún abono o pago.

Por su parte, Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS propusieron recurso de apelación, apoyando la solidaridad propuesta por la demandante, exaltando que el Hospital Ortopédico SOS tiene dentro de su objeto la prestación de servicios de salud, el que fue cumplido por el médico; además, dijo que el actor reconoció que siempre se encontraba dispuesto para cuando sus servicios eran necesarios, lo que lleva a concluir que lo que en realidad se presentó fue un contrato de realidad y no uno de prestación de servicios, debiéndose dar prelación al principio de la realidad sobre las formas; en la que ella obraba como simple intermediaria con el hospital demandado, quien era el verdadero empleador.

#### **IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

Es preciso anotar que conforme al art. 66A del CPTSS la competencia de esta corporación se limita a los puntos que fueron objeto de apelación por la parte demandante y la demandada Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, en aplicación del principio de consonancia.

#### **V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Este despacho judicial, a través de auto, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes no lo hicieron dentro de la oportunidad procesal tal como se observa en el expediente.

Es así, que se tienen atendidos los alegatos de conclusión presentados en esta instancia.

## **VI. PROBLEMA JURIDICO**

Examinados los hechos, pretensiones de la demanda, la sentencia y los puntos objeto del recurso, corresponde a esta Sala determinar si lo debatido es un contrato realidad o una regulación de honorarios, desatado lo anterior, fijar, si al demandante se le adeudan sumas que deban ser canceladas por las demandadas, frente quienes se debe establecer si deben ser condenadas solidariamente.

## **VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

La sentencia de instancia será modificada, por las razones que siguen.

Con la demanda la parte demandante solicitó que se reconociera la existencia de un contrato de prestación de servicios, y en consecuencia, el pago de unos honorarios adeudados, situaciones frente a las cuales ejercieron su derecho de defensa la demandada y vinculadas. Así, al no haberse reformado la demanda, el juzgado de conocimiento estableció que era sobre lo pedido en el líbelo genitor que se fundaba la controversia a resolver.

Con relación a la congruencia, es menester recordar que se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes, en el sentido que al juez solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado

dentro del mismo, tal como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, entre otras en sentencia SL 604-20021, así:

El principio procesal de congruencia establecido en el entonces vigente artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los litigios del trabajo por autorización expresa del precepto 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es una expresión del debido proceso y el derecho de defensa, que se manifiesta en la obligación del juez de adecuar la definición del juicio a las pretensiones y hechos planteados en la demanda inicial, a las excepciones y circunstancias fácticas presentadas por la contraparte, así como a lo alegado por las partes en las oportunidades procesales pertinentes.

Dichas actuaciones limitan la autonomía judicial del juez, quien debe obrar dentro de ese marco trazado por las partes, dado que es lo que edifica la relación jurídica sustancial y procesal de estas en el espacio jurisdiccional.

Ahora, ello no es obstáculo para que el juez, eventualmente pueda interpretar la demanda. De hecho, la Corte ha señalado que “constituye su deber dado que está en la obligación de referirse “a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales” (art. 55, L. 270/1996), de manera que su decisión involucre las peticiones del escrito inicial en armonía con los hechos que le sirven de fundamento (CSJ SL2808-2018)”.[...]

Además, nótese que el juez de segundo grado también está sujeto a las materias específicas y debidamente sustentadas en la apelación que se haga contra la decisión primigenia, en virtud del referido y explicado principio de consonancia.

Así, la Corte tiene adocinado que las anteriores directrices procesales hacen parte de la denominada congruencia externa del fallo, según la cual ‘toda sentencia debe tener plena coincidencia entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en la contestación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia (CSJ SL2808-2018)’.

A su vez, la congruencia interna ‘exige armonía y concordancia entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas implícitas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutive. Por tanto, el fallo conforma



un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre la parte motiva y la resolutive' (CSJSL2808-2018)»”

De ceñirse la Sala a lo anterior, es claro que el juez acertó al limitar el estudio a la existencia de un contrato de prestación de servicios, dado que fue lo solicitado en la demanda, y sobre lo que tuvo oportunidad la parte demandada de fundar su defensa, salvaguardando así el debido proceso.

Si lo anterior no fuera suficiente, y teniendo en cuenta que el juez eventualmente podría declarar la existencia de un contrato realidad, en protección de los derechos de los trabajadores, esto solo se podría dar en los eventos en que con las pruebas arribadas al proceso demostraran que esto es evidente.

Así, es necesario recordar que para trabajadores particulares, el inciso 1° del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, establece que, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La dependencia del trabajador respecto del patrono, que otorga a éste la facultad de imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no instantánea ni simplemente ocasional, y c) El Salario como retribución de servicio.

A su turno, el inciso 2° ibídem, señala que: “...una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen...”

En ese orden de ideas, es claro que para la existencia válida de una relación laboral contractual es necesario que concurren los tres elementos

antes reseñados, sin importar la denominación que los contratantes impongan al mismo, circunstancia que tiene sustento Constitucional en el artículo 53 superior que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas; de no serlo así indefectiblemente se estaría en presencia de otra clase de contrato, no sujeto por consiguiente a la ley laboral.

Por su parte, el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo consagra la presunción de existencia del contrato de trabajo, en los siguientes términos: “...Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo...”

La sentencia SL13020-2017, frente a las particularidades del contrato de prestación de servicios, dijo la Corte lo siguiente:

“...el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo cual lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.

Por otra parte, es preciso señalar que, en los contratos de prestación de servicios, por lo general el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad necesarios para la ejecución de la labor encomendada.

Desde esa perspectiva, cuando se someta a juicio el principio de la realidad sobre las formas con el fin de que se establezca la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al Juez, en cada caso, sin desconocer los principios tuitivos del derecho laboral, analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o

desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación...”

Ahora bien, en cuanto a la aplicación de la presunción establecida en el artículo 24 del CST respecto del ejercicio de profesiones liberales, ese alto tribunal, en la sentencia SL1021-2018, precisó:

“Uno de los principios transversales en el derecho del trabajo, es el de prevalencia de la verdad sobre las apariencias, que se instituye y, además, se justifica, en tanto procura equilibrar una ecuación desigual e inequitativa que se presenta en las relaciones laborales dependientes, cual es el de la imposibilidad de predicar plena libertad para convenir las condiciones en las que aquella se va a ejecutar.

Para su concreción se ha acudido a una presunción, que en el ordenamiento jurídico colombiano está inserta en el artículo 24 del estatuto del trabajo, según la cual la prestación personal de un servicio, que además está remunerado, trae de consuno la predeterminación de estar frente a una relación laboral, que en todo caso puede ser desvirtuada.

Aunque el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 50 de 1990, intentó modificar tal figuración jurídica, al introducirle una modificación al anterior precepto, según la cual «quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en el ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1 de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada», lo cierto es que fue apartado del ordenamiento, a través de la sentencia de inexequibilidad CC C-665/1998, al estimarse que tal contenido quebrantaba el criterio de igualdad, angular en la estructura constitucional que irradia a la ley del trabajo y que por tanto era inadmisibile.

Esa determinación, no obstante, no implica que en el estudio del caso se desconozcan los propios matices que se presentan cuando se debate un contrato en el que está inmersa una profesión liberal, no para exonerarlos de tal presunción, sino por el contrario para incorporar en su análisis las particularidades que aquellas presentan.

En efecto, si se les denominó profesiones liberales es justamente por la libertad e independencia de que gozan quienes las ejercen y en las

que media la autonomía técnica, una organización profesional y una marcada autodeterminación en la forma en la que la tarea se lleva a cabo, que está estrechamente ligada con la propia responsabilidad personal de los sujetos por los actos profesionales y a las que se añade que todas ellas se someten a un código moral profesional que va a guiar su ejercicio, sin que ello implique que se presente la subordinación.

Así puede articularse la idea de profesión liberal como aquella que tiene un contenido estrictamente intelectual, para la que se precisa una titulación, reconocida por el Estado, y amparada en el artículo 26 constitucional, en la que rige la *lex artis*, entendida como un contenido ético y técnico científico que dirige la labor, la cual tiene especial trascendencia social y que está marcada por la autonomía.

También puede destacarse que tales profesiones se enmarcan bajo la idea de una libertad externa, esto es la que permite su ejercicio, y una libertad interna, que es la que identifica que la persona pueda organizar la manera en la que llevará a cabo su tarea, y aunque es cierto que, en el caso de los odontólogos, tanto la socialización de los servicios de salud, como la salarización de este tipo de profesionales hacen más difícil su estudio, lo cierto es que el mismo no puede escapar a la judicatura, en tanto hacerlo preserva este tipo de relaciones jurídicas especiales y por ello no pueden resolverse bajo la idea genérica de estar ante el mismo prototipo, sino que imponen identificar si existe o no insuficiencia jurídica y probatoria para declarar el contrato de trabajo.

Tanto la ajenidad, como la dependencia van a constituirse en conceptos jurídicos que, en todos los casos de aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, van a requerir de valoración judicial y, en el caso de las profesiones liberales van a servir de indicadores para establecer cuándo es posible que se concrete una relación de trabajo, en una actividad a la que por esencia se le va a dificultar imponer las reglas laborales ante la marcada autonomía intelectual que se requiere, que pueden hacerlas incompatibles con el poder de dirección empresarial.

El examen que de ellas se realice, se insiste, debe atender una rigurosidad que es la que va a permitir tener certeza sobre si, pese a la prestación personal, esta se ejecuta con plena independencia y para ello serán concluyentes, indicadores como los de si el ejercicio de esa profesión libre se hace compatible con otras tareas, si la persona tomó a otros profesionales a sus servicios, cuáles fueron las incidencias de las directrices en la forma en que se ejecutó la tarea contratada, como

por ejemplo, en una actividad médica, si esta se limitó en la escogencia del tipo de medicamentos que debió utilizar o tratamientos a los que acudir, cuáles intervenciones realizar, que van a la par con el propio régimen de responsabilidad, dado que no será igual adscribirse a la entidad, que a quien lo ejecuta.

El prisma tradicional varía porque, como se anotó, debe tener en cuenta mayores variables cuando se está ante una profesión liberal, como la que aquí se discute y con ella se busca remontar la dificultad de diferenciar el trabajo autónomo del subordinado, lo que tiene clara e importante incidencia en la vida social. **Se trata, como ya se dijo al inicio, no de desconocer que opera la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sino de que esta se desvirtúa con mayor intensidad cuando se demuestra estar frente a una profesión liberal, porque ello parte de reconocer que la Constitución económica habilita el ejercicio profesional autónomo, que deriva del principio de pro libertate, que por demás se trasladó al propio contenido de la Ley 100 de 1993, que en sus inicios permitió que los profesionales independientes pudiesen gestionar el derecho fundamental a la salud en algunas de sus facetas, e integrarse a fundaciones o cooperativas para tal fin.**” (Negrilla fuera de texto original)

Ahora, la consecuencia de la aplicación de la presunción en comento, no es otra que la inversión de la carga de la prueba, es decir, una vez demostrada por la parte actora la prestación personal del servicio en favor de la parte demandada, dentro de unos determinados extremos temporales, incumbe a esta última desvirtuar la existencia del vínculo presumido, a través de los medios probatorios legalmente establecidos, esto es, probar que dicha prestación de servicios no fue subordinada ni dependiente.

Así las cosas, el demandante al surtir el interrogatorio de parte, señaló que inició aproximadamente la vinculación con Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS a mitad del año de 2018 y parte de 2019, para prestar sus servicios como neurocirujano para la atención y cirugías de pacientes, lo que se realizaba en el Hospital Ortopédico; vinculación como especialista que se realizó a través de un contrato de prestación de servicios. Que, en el caso específico, después de prestar el servicio realizaba la cuenta

de cobro, la que debía acompañar con la epicrisis y factura, documentos que eran remitidos a tesorería, quien le indicaba que el pago se daba entre 60 y 120 días.

Dijo que él no cumplía turnos por ser un médico adscrito, por lo que cuando lo llamaban iba a revisar el paciente y programaba la cirugía, lo que podía darse en cualquier momento del día, y que, en el evento de no prestar ningún servicio, pues no realizaba cuenta de cobro, situaciones por las que es claro que no tenía con la empresa una vinculación laboral.

La manifestación del actor permite ver que éste reconoce el vínculo con la demandada como uno de carácter civil y no laboral e indicando a Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, como contratante, quien era el único que le asignaba pacientes, los que él con sus concomimientos como neurocirujano brindaba una consulta y de ser necesaria una intervención quirúrgica, sin que se le exigiera un número determinado de estas o de horas presentes en el Hospital Ortopédico SOS, en el que se realizaban las cirugías.

Por otra parte, no se encuentra prueba que lleve a demostrar que la relación que existía entre las partes era subordinada, dado que, con la demanda solo se aportaron seis facturas, que se alegan como no canceladas en el marco de un contrato de prestación de servicios, el que, a su vez, fue reconocido por parte de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS al contestar el libelo genitor. Situaciones por lo que no hay pruebas, que muestren siquiera un indicio de la existencia de subordinación entre el actor y las entidades de salud demandadas.

Con la contestación a la demanda por parte de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, se tiene que éste contrató al demandante para operar en la clínica Hospital Ortopédico SOS Trauma, intervenciones

médicas que se realizaban bajo el contrato de cuentas en participación suscrito entre las dos entidades; además reconoció que las obligaciones y facturas que se alegan como adeudada, en efecto no se han cancelado.

Así, en este punto, se advierte que lo adeudado al actor son las facturas de servicios del año 2019, así:

- 28 de mayo<sup>1</sup>, 26 de junio<sup>2</sup>, 8 de julio<sup>3</sup> y 19 de septiembre, por \$2.000.000 cada una, excepto la última que fue por \$4.000.000; por el concepto de disponibilidad para prestar servicio
- 8 de julio<sup>4</sup>, por \$10.981.120, por el concepto de cirugías realizadas entre abril y mayo de ese año.
- 9 de julio<sup>5</sup> por \$3.035.618, por consulta externa e interconsulta entre abril y mayo.

Las cuales registran con sello de recibido de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, del mismo día o al siguiente de la expedición.

Es decir, que el total es de \$24.016.738, valor que fue reconocido por parte de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, en la contestación de la demanda.

Por otra parte, en cuanto a quien corresponde el pago de esta obligación, se tiene que Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS tiene suscrito con el Hospital Ortopédico SOS un contrato de cuentas por cobrar suscrito el 10 de diciembre de 2018<sup>6</sup>, pero, son varios factores los que se deben tener en cuenta para establecer si los servicios que prestaba

---

<sup>1</sup> F. 12 PDF 01 CJ

<sup>2</sup> F. 13 PDF 01 CJ

<sup>3</sup> F. 16 PDF 01 CJ

<sup>4</sup> F. 14 PDF 01 CJ

<sup>5</sup> F. 15 PDF 01 CJ

<sup>6</sup> F. 65 PDF 14 CJ

el médico especialista estaban inmersos en el acuerdo entre las instituciones, pero no como solidaridad laboral sino como una responsabilidad conjunta, que es la que derivan ese tipo de contratos.

Lo primero que se debe recordar es que en el líbelo genitor se indicó que la vinculación con Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS fue a través de un contrato verbal de prestación de servicios en enero de 2019, mientras que en el interrogatorio de parte se dijo que este inició a mediados del año anterior, sin que este reconozca al otro centro de salud como su contratante.

Teniendo en cuenta que la obligación que existe entre los centros asistenciales es una de carácter civil, y por tanto las responsabilidades que de esta se deriven son arista de esa jurisdicciones, pero con el fin de establecer a cargo de quien se encuentra la responsabilidad de pago de los honorarios del demandante, se tiene en el contrato de cuentas de participación en el parágrafo segundo del numeral tercero señala como compromisos y obligaciones de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS:

1. Dispones del recurso humano profesional, técnico y administrativo idóneo, que cumpla con los requisitos y normas establecidas por el Sistema de Garantía de Calidad y sufragar los costos de: mano de obra, insumos y medicamentos que derive la actividad asistencial y administrativa objeto del presente contrato. [...] Contará con recurso económico y humano suficiente que permita atención permanente 24 horas [...] tales como: [...] d. médicos generales y médicos especialistas [...]

PARAGRAFO I: los convenios, contratos civiles, comerciales laborales o de cualquier otro tipo que suscriba Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica, para el fin del presente contrato, serán por su absoluta cuenta y riesgo, y correrá con todas sus cargas y obligaciones.

PARAGRAFO II: Es entendido que el personal utilizado por Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica estará bajo su



responsabilidad, por lo que estos no adquieren vínculo de carácter laboral, administrativo o contractual alguno con la sucursal Hospital Ortopédico SOS Trauma IPS SAS.

Con lo expuesto se tiene que el contrato de prestación de servicios, aun cuando este fue verbal, el actor reconoció suscribirlo con la empresa Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica, situación que fue aceptada por esta última, sin que se estableciera una responsabilidad compartida con el Hospital Ortopédico SOS, pues de ser así, debía haberse fijado en el contrato que entre las entidades se suscribió, sin que ello se presentara; y, sin que haya lugar a declarar la solidaridad, por solo opera en los contratos labores cuando la empresa usuaria se beneficia del trabajo, situación que atrás ya se desató.

Además, no se puede pasar por alto, que las facturas aportadas al proceso cuentan con sello de recibido de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS, siendo demostrado con las pruebas obrantes en el expediente, que ésta es la única responsable del pago de los honorarios reclamados.

Por último, en lo que respecta a los intereses por mora, se tiene que se encuentran regulados en el artículo 1617 del Código Civil, por tratarse de la tardanza del pago de unos honorarios causados dentro de un contrato de prestación de servicios, el que no se encuentra cobijado por las normas de derecho laboral.

#### Artículo 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero

Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en seis por ciento anual.

2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.

3a.) Los intereses atrasados no producen interés.

4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.

En tanto, al no demostrar mediante documento que estos no se otorgarían en el evento de mora, se entiende que el contratante se comprometía a los legales, antes señalados; así las cosas, la última factura se radicó por el demandante a Sistemas Expertos en Salud Latinoamérica el 19 de septiembre de 2019, siendo reconocido por el primero que el pago podía tardar hasta 120 días, razón por la que, el concepto pretendido procede después de agotar el término indicado desde la última factura, es decir a partir del 20 de enero de 2020, en los términos del artículo 1617 del Código Civil.

Por las razones expuestas se modificará la sentencia de primera instancia.

Las costas por ser legales, hay lugar a confirmar las de primera instancia, en esta oportunidad correrán a cargo de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS en favor del demandante, por no prosperar el recurso de apelación propuesto, se incluirá como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Cali, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

Primero: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero la sentencia 067 del 16 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, en lo que concierne a la indexación de las sumas reconocidas, en su lugar, se CONDENA a los intereses de mora establecido en el artículo 1617 del Código Civil, a partir del 20 de enero de 2020 y hasta cuando se realice el pago efectivo de los honorarios adeudados.

Segundo: CONFIRMAR en lo demás la sentencia 067 del 16 de marzo de 2023 proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali.

Tercero: COSTAS en esta instancia, a cargo de Sistema Expertos en Salud Latinoamérica SES SAS y en favor de José Fernando del Carmen Arango Villa, se fijan como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.

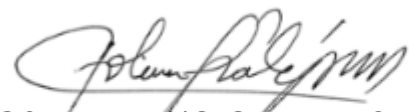
Cuarto: Por la secretaría de la Sala Laboral, notifíquese esta sentencia por edicto a las partes y demás intervinientes, conforme a las directrices trazadas por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el auto AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, rad 89628 y, en la STP3384-2022.

Quinto: DEVOLVER por secretaría el expediente al Juzgado de origen, una vez quede en firme esta decisión.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

(Firma electrónica)  
**ÁLVARO MUÑIZ AFANADOR**  
Magistrado Ponente

  
**CAROLINA MONTOYA LONDOÑO**  
Magistrada

  
**CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ**  
Magistrado

Para consulta, acceso al expediente:  
[ORD 76001310501520190062901](https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/ORD/76001310501520190062901)

Firmado Por:

**Alvaro Muñiz Afanador**

**Magistrado**

**Sala 011 Laboral**

**Tribunal Superior De Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5bad4b21fe2a721084c9fd50797ae883b7a0fe203f6562b003ca078ece7a2124**

Documento generado en 24/06/2025 12:03:04 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**